

Conferencia episcopal

Con una exhortación de tono evangélico para “caminar hacia la unidad de la Iglesia”, el cardenal Jorge Bergoglio ofició una misa con la cual quedó formalmente inaugurada la segunda Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina del año, en la localidad de Pilar. El vocero de la Conferencia Episcopal, Jorge Oesterheld, mencionó que entre los temas centrales del encuentro figuran la actividad de Cáritas y señaló que “el tema de la actuación del obispo Joaquín Piña en Misiones estuvo presente en conversaciones informales” entre los obispos reunidos. Seguramente, la posterior baja de las intenciones reeleccionistas del juez Eduardo Fellner y del bonaerense Felipe Solá también serán motivo de análisis.

La pelea radical

El Comité Nacional de la UCR comunicó ayer oficialmente a la Justicia Nacional Electoral la intervención al distrito mendocino adoptada el martes pasado por la mesa partidaria. Con el escrito se adjuntaron las decisiones tomadas por el interventor Armando Camerucci. La medida no es casual ya que lo primero que hizo fue suspender el Congreso convocado por el sector del gobernador Julio Cobos. Este sector afirmó ayer que el partido “no está intervenido”, ya que el planteo fue considerado abstracto por el juez federal Walter Bento. Por otro lado, las autoridades radicales convocaron a una reunión para el viernes, como demostración de fuerza frente a los sectores K.

Scioli con Ibarra

El vicepresidente Daniel Scioli y el ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra compartieron ayer un panel frente a un centenar de empresarios porteños en un debate organizado en un hotel céntrico. Los problemas del tránsito, los piquetes, la basura fueron algunas de las preocupaciones del público y de los panelistas. Scioli adelantó que “estudia la posibilidad de introducir cambios en el sistema de recolección de basura, ya que el servicio quedó desbordado por la nueva realidad económica y del consumo”.

La Justicia ordenó la detención del almirante Jorge Isaac Anaya

El ex comandante en jefe de la Armada, almirante Jorge Isaac Anaya, integró la Junta Militar que decidió, en 1982, el desembarco en Malvinas. Libre hasta ayer, el juez federal Sergio Torres acaba de ordenar su detención junto a doce marinos, en el marco de la megacausa de la ESMA. Les tomará indagatoria —al igual que a otros 21 represores ya detenidos— por 266 hechos desprendidos de la investigación principal. Los 34 marinos serán indagados entre mañana y el lunes próximo.

Torres tomará las declaraciones en el marco de la megacausa de la Escuela de Mecánica de la Armada. Ese expediente, reabierto tras la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, concentra las investigaciones por los delitos de lesa humanidad cometidos en el emblemático centro clandestino organizado por el ex almirante Emilio Eduardo Massera.

Los imputados son parte de los 295 nombres que integraron el listado que elevó el fiscal Eduardo Taiano a fines del año pasado en el marco de la investigación. Para Taiano, los represores “organizaron, plantearon o ejecutaron las privaciones ilegales de la libertad, las torturas, el sometimiento a condiciones inhumanas de vida, la muerte, el robo, la apropiación extorsiva y/o fraudulenta de bienes, la apropiación de niños y la intervención en los traslados”.

En esos términos será indagado Anaya, ex comandante en jefe de la Armada del 12 de septiembre de 1981 al 1º de octubre de 1982, ex director de Personal Naval, entre diciembre de 1977 y febrero de 1980. Anaya fue absuelto y goza de libertad por la conocida causa 13 del juicio a los ex comandantes. La declaración de un testigo permitió ubicarlo en el traslado de un grupo de detenidos en avión, desde Ezeiza a Bahía Blanca.

Los otros pedidos de detención alcanzaron a Antonio Vañek, comandante de Operaciones Navales, de enero de 1977 a septiembre de 1978, y jefe del Estado Mayor de la Armada de septiembre de 1978 a febrero de 1980. Los testimonios lo ubican en la ESMA en 1979; Eugenio Batista Vilardo, capitán de corbeta, jefe de prensa de Cancillería e integrante de la ESMA entre 1977 y 1978; Roberto Pérez Fiorio, ex director general de Prensa y Difusión de Cancillería y miembro de la ESMA entre 1977 y 1978; Oscar Rubén Lanzón, alias Horacio Gurati, quien se desempeñó como jefe de Inteligencia del Grupo de Operaciones Especiales de la Armada (GOEA) y

En el marco de la megacausa de la ESMA, el juez federal Sergio

Torres pidió la captura del marino que había sido absuelto en el Juicio a las Juntas. Otros 34 represores serán indagados esta semana.



Jorge Isaac Anaya, integrante de la Junta Militar que ordenó el desembarco en Malvinas.

Le tomarán declaración por 266 hechos desprendidos de la causa central de la ESMA.

hasta 1982 estuvo en la ESMA.

La lista incluyó a otros siete represores: Aníbal José Mazzola, alias “Mayor”, era suboficial de Logística del Grupo de Tareas de la ESMA, hombre de confianza de Jorge “El Tigre” Acosta. Entre 1977 y 1979 estuvo en la ESMA. Miguel Angel Benazzi Berisso, alias Manuel, era otro de los pesos pesados, oficial de Secretaría de Inteligencia en 1976, jefe de Operaciones en el exterior con actividades de agregado naval en Bolivia, compartió la Jefatura de Inteligencia con Rodolfo Donda Tigel cuando ambos eran tenientes de navío. Hugo Enrique Damerio, alias “Jirafa” o “Carlos”, era teniente de navío y estuvo en la ESMA entre 1978 y 1979.

En la nómina figura también el caso del marino y dermatólogo Rogelio José Martínez Pizarro, un corbó que se desempeñó con una cobertura legal en el consultorio Número 3 de la ESMA, donde se lo vio

entre 1977 y 1978 y se lo conoció como “Tomy”. Además, el juez pidió la detención de Carlos José Pazo, capitán de corbeta en 1977 y operativo en los secuestros. De Carlos Jaime Fragio, director de Personal Naval entre febrero y septiembre de 1976. Y de Julio Antonio Torti, jefe del Estado Mayor Conjunto entre el 19 de diciembre de 1977 y el 21 de septiembre de 1978, comandante de Operaciones Navales entre el 22 de septiembre de 1978 y el 5 de febrero de 1980, indultado.

Finalmente, el juez incluyó en la lista a Carlos Guillermo Caros Mason hijo, alias “el hijo de Sam”, que en 1977 permanecía como rotativo y en 1999 ascendió a capitán de navío a pesar de la objeción de los organismos de derechos humanos y querellantes que impulsan las causas por delitos de lesa humanidad.

“Entonces con el objeto de concretar las audiencias dispuestas —dijo el juez en el escrito— toda vez

que se trata de personal de la Armada Argentina oficiase” al “ministro de Defensa” y al “jefe de la Armada Argentina” “a los fines de que constituya en detención”.

El resto de los indagados están detenidos por otras causas, pero también quedarán técnicamente presos en el marco de esta nueva orden. Entre ellos están el Tigre Acosta, Alfredo Astiz y Antonio Pernías. En todos los casos, serán sometidos a las primeras indagatorias de esta nueva causa que tramitará como un desprendimiento de la principal. Entre otros casos, deberán rendir cuenta por las violaciones cometidas contra Graciela Daleo, Juan y Susana Beatriz Pegoraro, Juan Gasparini y Raúl Alberto Mattarolo. Y una vez finalizadas las audiencias, el magistrado tendrá diez días para resolver sus situaciones procesales. Deberá optar entre sus procesamientos con o sin prisión preventiva, los sobreesimientos o la intermedia “falta de mérito”.

AVANZA EL PEDIDO DE EXTRADICION DE MILITARES URUGUAYOS

El asesinato de la nuera de Gelman

La Justicia uruguaya comunicó a seis militares y un policía que actuaron durante la dictadura las imputaciones presentadas por Argentina para solicitar su extradición, acusados de cometer violaciones a los derechos humanos en el marco del Plan Cóndor. El juez Daniel Tapié informó a los militares y a la policía sobre los pedidos de extradición de los jueces argentinos Daniel Rafecas y Norberto Oyarbide, quienes investigan delitos y violaciones de los derechos humanos, entre ellos el secuestro y asesinato de María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman.

Los militares uruguayos están acusados de haber participado en interrogatorios y torturas de pri-

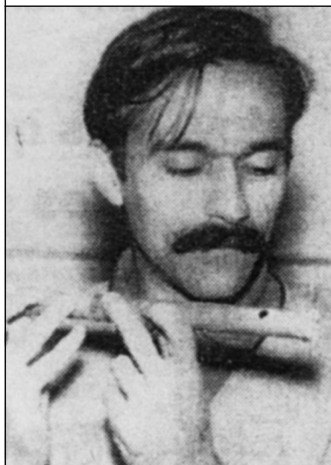
sioneros en el campo de concentración Automotores Orletti, en la década del '80, en el marco del plan represivo de las dictaduras de la región. Estos represores uruguayos se encuentran presos en la Cárcel Central en Montevideo mientras se tramita la extradición a pedido de jueces de Argentina. Las imputaciones corresponden a los oficiales retirados del Ejército José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez y Ernesto Ramas, y al ex policía Ricardo Medina, según la agencia ANSA. Los detenidos están procesados por la desaparición en 1976 de opositores políticos uruguayos que se habían refugiado en Argentina.

Durante el operativo por el cual fueron informados, un vallado de seguridad impidió que integrantes

de organizaciones defensoras de los derechos humanos se aproximaran a los detenidos. Ricardo Arab, al salir del juzgado, levantó los brazos mostrando sus manos esposadas y gritó a los manifestantes: “¿Esto es lo que querían?”. Según el sitio web del diario *El País*, los uniformados respondieron negativamente cuando Tapié les preguntó si estaban dispuestos a ser extraditados a la Argentina. El mismo diario recordó el sábado que el juez uruguayo Juan Fernández Lecchini decidirá en los próximos diez días si aprueba el pedido de extradición del juez argentino Guillermo Montenegro contra los militares uruguayos que participaron del Plan Cóndor. Este magistrado acusa a los mismos militares de asociación ilícita y privación ilegal de la libertad.

Eduardo Aníbal Marino

Secuestrado-desaparecido el 5-11-77



Desde hace 29 años nuestro mejor homenaje es la Memoria y el reclamo de Justicia.

“La justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda”

Eduardo Galeano.

Ariel, Grisel y Lautaro, Noemí, Jacobo, René, Alejandro, Norma, Marta, Susana, Osvaldo, Bebe, Madela, Ana María, Lucía, demás familiares, compañeros y amigos.